El magistrado que se jubila después de prestar treinta años de servicios, siendo los últimos prestados en el ramo judicial, gozará de una pensión que comprende el sueldo y todas las bonificaciones y asignaciones que se otorgan a los funcionarios en servicio de igual categoría.

DICTAMEN FISCAL

Señor:

El sexto Juzgado en lo Civil de Lima, por sentencia de fs. 37, ha declarado infundada la demanda, interpuesta por el doctor Bruno Vargas Buenaño contra el Supremo Gobierno, sobre nulidad de Resoluciones. Apelada dicha sentencia, el Tribunal Superior, por la de vista de fs. 54, la revocó, declarándola fundada, en parte, ordenando que debe renovarse la cédula de jubilación en favor del actor, de acuerdo a la nueva escala de haberes de los Magistrados; y la confirmó, en cuanto deniega el pago de devengados. Contra esta resolución, se ha interpuesto recurso de nulidad.

Por recurso de fs. 22, el doctor Bruno Vargas Buenaño, interpone demanda contra el Supremo Gobierno, para que se declaren nulas y sin valor ni efecto alguno, las Resoluciones de fecha 19 de noviembre de 1964 y de 10 de junio de 1965, expedidas por el Ramo de Justicia, por las que, se le ha denegado su pedido de renovación de cédula de jubilación, conforme a la nueva escala de haberes de los Magistrados y, el pago de los devengados; funda su acción, en el hecho de ser Fiscal Jubilado, con 30 años y 17 días de servicios prestados a la Nación, y en lo dispuesto por el art. 110 de la L. O. del P. J. Corrido traslado de la demanda, el Procurador General de la República, por su recurso de fs. 25, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos. I, constituyendo el presente caso, una controversia de puro derecho, se corrió traslado al demandante, quien replicó a fs. 26, negando los fundamentos de la contraria, y por recurso de fs. 27, el Procurador General de la República, expuso su réplica, reproduciendo los fundamentos de su contestación a la demanda.

Apreciando el texto de la demanda de fs. 22 y el texto de la disposición contenida en el art. 110 de la L. O. del P. J., así como las

disposiciones contenidas en las Leyes Nos. 15463 y 15117, referentes a los casos contemplados en el art. 111 de la citada Ley Orgánica, es evidente que, el caso en que se encuentra el demandante, es el de un Magistrado jubilado, con más de 30 años de servicios que, conforme a la disposición legal invocada en su demanda, puede regular su cédula de jubilación de acuerdo a la nueva escala de haberes. I, como lo dice el Tribunal Superior, en su resolución recurrida, el pedido del demandante, no puede plantear un problema de retroactividad de la ley, puesto que, la misma disposición del art. 110 de la L. O. del P. J. establece que "las pensiones de los Magistrados cesantes o jubilados serán reguladas de conformidad con las modificaciones de la escala de sueldos que perciban los de igual categoría que estén en servicio, debiendo extenderse nueva cédula cada vez que aquella escala sea modificada". I, al ser así, es perfectamente amparable el pedido que contiene, sobre este aspecto, la demanda de fs. 22. Sin embargo, no puede correr la misma suerte, el pedido de los devengados, por ser contrario a la ley.

Por tales razones, este Ministerio, es de opinión que, se declare, NO HABER NULIDAD, en la recurrida que, revocando en parte, la apelada, declara fundada, en parte, la demanda de fs. 22, esto es, en cuanto ordena la expedición de nueva cédula de jubilación, regulándose la pensión de acuerdo a la nueva escala de haberes de los Magistrados de su categoría; y que, declara sin lugar, el pedido de pensiones devengadas.

Lima, 23 de junio de 1966.

VELARDE ALVAREZ

RESOLUCION SUPREMA

Lima, veintidós de julio de mil novecientos sesentiseis.

Vistos; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal; y considerando además que las pensiones de jubilación y cesantía a que tienen derecho los magistrados, se encuentran reguladas en los artículos ciento diez y ciento once de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial; que el primero se refiere a quienes se jubilan, sin especificar la exigencia de determinado número de años de servicio, a los cuales se les reconoce el derecho de renovar su cédula cada vez que la escala de sueldos sea modificada; que para los magistrados que se jubilan

después de cumplir treinta años de servicios, siendo los diez últimos prestados en el ramo judicial, el artículo ciento once, ampliado en sus alcances por la Ley número quince mil ciento diecisiete, estipula que tendrán derecho a acumular al sueldo percibido "todas las bonificaciones y asignaciones que se otorgan a los funcionarios en servicio, de igual categoría"; que, en consecuencia, si bien es cierto que en ambos casos, se reconoce a los jubilados y cesantes, el derecho a la renovación de la cédula cada vez que la escala de sueldos correspondiente sea modificada, existe la diferencia que para quienes tienen treinta años de servicios, siendo los diez últimos prestados al Poder Judicial, la nueva cédula acumulará al sueldo todas las bonificaciones y asignaciones de cualquier clase que perciban los funcionarios en actividad; en cambio, para quienes carecen del requisito del tiempo de servicios, la modificación de la cédula sólo se referirá al sueldo básico, que será el que perciben los magistrados de igual categoría en actual servicio; que, si el caso materia de autos se refiere a magistrado jubilado sin la concurrencia de los requisitos del artículo ciento once, es evidente que su situación se halla comprendida dentro de las prescripciones del artículo ciento diez de la precitada Ley Orgánica: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fojas cincuenticuatro, su fecha veinticinco de abril del presente año, que revocando la apelada de fojas treintisiete, su fecha tres de noviembre de mil novecientos sesenticinco, declara fundada en parte la demanda de nulidad de resoluciones interpuesta a fojas veintidós por don Bruno Vargas Buenaño contra el Supremo Gobierno; y en consecuencia, nulas las Resoluciones Supremas que se indican; y, que se debe otorgar al actor nueva cédula de jubilación con el sueldo básico que perciben los magistrados de igual categoría en actual servicio; con lo demás que contiene; sin costas; y los devolvieron.— GARCIA RADA.— VIVANCO MUJICA.— ALARCON.— PERAL.

Atendiendo a que la Ley número quince mil cuatrocientos sesentitres, al establecer que el artículo primero de la Ley número quince mil ciento diecisiete es modificadorio sólo del párrafo primero del artículo ciento once de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha dejado subsistente el párrafo segundo de dicho dispositivo legal, en virtud del cual, para que los magistrados cesantes y jubilados antes del veintiséis de julio de mil novecientos sesentitres puedan acogerse a sus beneficios, es menester que tengan treinta años de servicios reconocidos, de los cuales los diez últimos deben haber sido prestados en el Poder Judicial; y que la aplicación del artículo ciento diez de la

Ley Orgánica del Poder Judicial debe hacerse en función de lo que el párrafo segundo del artículo ciento once de dicha ley señala, para que las disposiciones sobre esta materia llenen su finalidad de acuerdo con el propósito que las inspiró, tal como se ha sugerido en el Acuerdo de Sala Plena de la Corte Suprema a que se refiere el inserto de fojas cincuentiuno; con lo expuesto por el señor Fiscal: mi voto es porque se declare HABER NULIDAD en la recurrida y que reformándola se confirme la de primera instancia que declara infundada la demanda.—MAGUINA SUERO.— Se publicó conforme a ley.—Lizandro Tudela Valderrama, Secretario.

Causa N° 247/66